

**VOLVER A LOS 17:
LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN POLÍTICA**

(LIDERAZGO, CAPITAL SOCIAL Y CREACION DE VALOR PÚBLICO:
CONJETURAS DESDE CHILE)

SERGIO SPOERER H.

INDICE

I. OBERTURA: SI LA POLITICA SE ENFERMA, LA GESTIÓN PÚBLICA NO SOBREVIVE.

EXCURSO (1): Decíamos ayer (memento ONG)

II. MODERNIZACION DE MODERNIZACIONES ¿Y TODO MODERNIDAD?.

EXCURSO (2): Emociones Cívicas Confesables.

III. LA POLITICA HA MUERTO: ¡VIVA LA POLITICA!

EXCURSO (FINAL): Notas para una ponencia al próximo Congreso.

Esta ponencia no pretende “demostrar” nada. Su escritura es, libremente, la del ensayo. En sus notas, se pretende dar respaldo a algunas de las afirmaciones contenidas en el texto y dejar algunas huellas de las principales lecturas que han acompañado este ejercicio.

Muchas de estas ideas han sido conversadas con Luis Campos Medina durante los últimos meses. Salvándolo de toda responsabilidad, su contribución en el tercer apartado es de co-autoría.

VOLVER A LOS 17: LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN POLÍTICA

(LIDERAZGO, CAPITAL SOCIAL Y CREACION DE VALOR PÚBLICO: CONJETURAS
DESDE CHILE)

Sergio Spoerer¹

I. OBERTURA: “SI LA POLÍTICA SE ENFERMA, LA DEMOCRACIA AGONIZA”.

El ciclo de recuperación democrática iniciado en América Latina hacia mediados de la década de los '80, mantiene aún impagas sus deudas con la ciudadanía. Peor aún, en no pocos casos, los regímenes políticos instaurados desde entonces parecen insensibles a los costos crecientes que pagan por semejante morosidad(1).

La clase política nacida de la recuperación democrática no cumplió las promesas entonces hechas. La clase política se ha jibarizado, corporatizado y separado de sus referentes sociales. La clase política se ha “apoderado” del Estado. La clase política no ha sido capaz de separarse, de autonomizarse del peso de los poderes fácticos. Este frágil equilibrio está en crisis. Las figuras del neo-autoritarismo y/o neo-populismo se destacan desde un fondo de crisis social.

Existen riesgos ciertos de erosión de los progresos institucionales alcanzados durante los últimos 15 años.

¹ Director del Area Comportamiento Organizacional, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile).

La progresiva desarticulación o des-institucionalización del mercado político se ve reflejada en:

- demandas crecientes “no representadas”, no integradas a la tradicional negociación política.
- oferta política restringida.
- partidos sin representación parlamentaria
- expresividad social sin efecto político sistémico.

Lo anterior puede observarse en la dinámica que han venido presentando como síntoma los actores políticos. A saber:

- sobreideologización
- oligarquización
- corporativismo
- baja renovación y “neo-caciquismo de notables políticos”(2).

Ante esta realidad no es extraño que –complacientemente- se sostenga que “el sistema político chileno es el más eficaz de la región (...). Si uno mira el conjunto de la clase dirigente del país, el nivel de consenso respecto de los lineamientos centrales del modelo es altísimo. El mayor del último medio siglo (...). Si uno sentara a los líderes de gobierno y oposición en torno a una mesa se encontraría con que el nivel de cercanía es gigante”(3). Las elites creen vivir en el mejor de los mundos. El problema reside en el nivel de representación de los representados y en la creciente conciencia de su no representación.

Es así como el mejoramiento de la calidad de la gestión pública ha sido mayor y más rápido que la adecuación, compromiso y mejora de la calidad de la política. Lo anterior, está ligado a:

- interferencias por sobrepolitización del Estado.
- clase política cerrada y “autorreferente”, cuyo síntoma más claro es la baja tasa de renovación de sus dirigentes y líderes.
- falta de congruencia entre ofertas políticas y bases programáticas de los partidos (pragmatismo más ideologismo).

El sistema político no favorece la modernización del Estado, no ha mejorado sus prácticas de gestión y articulación. Existen “interferencias nocivas” entre la esfera política y el aparato público por lo que

surge el desafío de proteger al Estado (del sistema político) y acercarlo a la gente (ciudadanos, usuarios, sociedad civil).

Lo anterior, pone de manifiesto tres de las principales carencias del proceso modernizador del Estado. A saber:

- Dirección Pública (profesionalizada y protegida de intereses privados y clientelismos político-partidista).
- orientación y articulación con los ciudadanos-usuarios.
- incorporación de los funcionarios públicos.

Lo que de manera pertinente, Bernardo Kliksberg llamó hace más de una década “hacia una política nacional de transformación del Estado”(4), cobra vigencia nuevamente.

Ante dicha carencia, no podemos sino compartir que “la política está perdiendo su dimensión de gestión de los asuntos públicos y de los intereses generales para concentrarse en la manipulación de la ira, de la cólera, del cabreo. Canalizar el descontento hacia el adversario político, contribuir activamente a su descalificación, se convierte en la estrategia básica de toda fuerza que aspira a gobernar, o a permanecer en el poder”. (5).

En Chile pareciera como si el célebre comentario de Aníbal Pinto hubiese mutado: su cuerpo económico ha crecido, pero su cabeza política se ha jibarizado. El reto principal es el señalado por Douglass North: “La política es más importante que la economía (...). Puedo ir a cualquier país y decirles qué tienen que hacer para ser productivos y creativos. Lo que no sabemos es como crear y hacer posible en el largo plazo que esto se produzca y eso es función del sistema político y de cómo éste funciona”. (6).

Dar continuidad y profundizar el actual proceso de modernización del Estado requiere, ante todo, superar sus actuales límites políticos: mejorar la calidad del sistema político y de sus relaciones con el Estado, por una parte; y por otra, abrir uno y otro a la ciudadanía. El dilema planteado por Enrique Barros hace más de diez años se mantiene vigente: “el dilema que enfrenta el país hacia delante no es entre un Estado débil y permisivo, por un lado, y uno fuerte e intervencionista, por el otro. En verdad, la tarea de ordenación que le corresponde en una sociedad pluralista requiere de fortaleza para enfrentar presiones. Es la debilidad del Estado y de los partidos lo que puede hacer de la política un mercado

anárquico de influencia. Por eso, la ecuación correcta parece ser la inversa: lo que se requiere es un Estado que ejerza, con gran autoridad, funciones precisas y esenciales”(7). Hace mucho Paul Valery lo había escrito en “Regards sur le monde actuel”: “si el Estado es fuerte, nos aplasta; si es débil, perecemos”.

EXCURSO (1): Decíamos ayer (memento ONG)²

Las ONG han sido ámbitos privilegiados de aprendizaje social. De la diversidad de sus prácticas y su amplia “capacidad de escucha” ha resultado un potencial de innovación tanto en el plano de las ideas como de la experimentación social que ha considerablemente enriquecido la cultura democrática del continente. La entropía resultante de la tentación corporativa es grave menos por lo que hace que por lo que deja de hacer: dilapidar la ocasión de concertar acciones efectivas con actores sociales y fuerzas políticas capaces de asumir la riqueza de un vasto campo de posibilidades abierto por la recuperación democrática.

Dicho campo de posibilidades es, ante todo, para las ONG aprovechamiento efectivo de su capacidad de reducir la brecha existente entre el “arriba” institucional (capital, poder, conocimiento) y el “abajo” de la exclusión social. Brecha por la que se desangran las energías de las jóvenes democracias latinoamericanas. Contribución al cierre –o a la disminución- de esta brecha quiere decir para las ONG asumir las potencialidades de su capacidad política superando las tentaciones del reduccionismo a una lógica estrictamente “partidocrática” de la democracia. Dar cuenta de los desafíos específicos que enfrentan las ONG en esta materia requiere, previamente, caracterizar el escenario (democrático) en que se desarrolla su acción.

La dimensión fáctica del “arriba” prima por sobre su dimensión institucional. Estados y sistemas políticos débiles están permanentemente amenazados por poderes fácticos no regulados por orden jurídico alguno. Las Fuerzas Armadas –a medio camino entre su dimensión institucional y la desnuda realidad de lo fáctico- son, a menudo señaladas como la principal amenaza de un régimen democrático. La existencia de un “sector informal conspicuo” (narcotráfico, contrabando) y de una dinámica especulativa de la alta finanza, crean las condiciones de circulación no controlada de considerables masas de dinero (“la plata dulce”) que, vía corrupción u otras formas de crimen organizado, asedian a las instituciones democráticas. Policía, Poder Judicial, organismos públicos de fiscalización, prensa, son los principales destinatarios de este asedio.

Vulnerabilidad externa y desequilibrios estructurales son generadores de una verdadera explosión de las demandas sociales acumuladas. Enfrentadas a las llamadas políticas de ajuste estructural impuestas por

² S. Spoerer, *Las Organizaciones no Gubernamentales en la Democratización de América latina*. ILET, Santiago, 1987.

los organismos financieros internacionales generan permanentemente conflictos de variable intensidad que las frágiles instituciones democráticas difícilmente son capaces de regular. La débil capacidad de representación política de los partidos exacerba estos conflictos que adoptan entonces formas agudamente corporativas o la vía más radical de la violencia organizada. La acción corporativa expresa tanto la descomposición de la conciencia nacional como la desestructuración social que resulta de la existencia masiva de sectores excluidos de débil capacidad negociadora.

En este marco, la capacidad de los gobiernos democráticos para producir cambios en las concretas condiciones de vida de la mayoría de la población, se ve extraordinariamente disminuida. Abrumadas por el peso de los problemas heredados de años de autoritarismo e irresponsabilidad financiera y acosadas por los poderes fácticos, las jóvenes democracias latinoamericanas deben hacer frente, además, al desencanto participativo de vastos sectores ciudadanos. Escepticismo, apatía política, repliegue hacia los ámbitos privados, caracterizan este desencanto cívico que, deslegitimando las instituciones democráticas, acentúa su debilitamiento y acrecienta su vulnerabilidad.

Desde Tocqueville sabemos que democracia no es sólo una forma de régimen político sino un tipo de sociedad. En este doble sentido, el desafío democrático perfila el horizonte de posibilidades ofrecido a América Latina en la presente época.

Una adecuada evaluación de las distintas experiencias populares en materia de estrategias de sobrevivencia, podría sugerir criterios para formular políticas de satisfacción de necesidades básicas que consideraran adecuadamente la percepción que de ellas tienen sus destinatarios y la jerarquía y modalidades que establecen para satisfacerlas. En particular, este enfoque podría contribuir a un mayor equilibrio entre las necesidades materiales (que se supone “objetivas” y “cuantificables”) y las necesidades de orden más bien cultural y político, cuya satisfacción en el mundo popular se realiza a través de modalidades que no hacen separables las unas de las otras.

Desde el punto de vista de la dinámica social que pueda hacer operativo un enfoque como el propuesto, la noción de participación social es de gran importancia. La literatura sobre el tema es tan extensa como la diversidad de experiencias. Desde el punto de vista del análisis relativo a los sectores de que nos hemos ocupado aquí, el problema que interesa plantear es el del paso de formas de “participación autodefensiva” a formas de “participación conflictiva” que ponen en cuestión el sentido y modalidades de un estilo de desarrollo. Dicho de otro modo, el problema es si y cómo es posible pasar de los niveles

de “micro-participación” relativos a las estrategias cotidianas de sobrevivencia de individuos, unidades domésticas, pequeños grupos a los niveles locales, sectoriales y regionales e, incluso a las formas del Estado y del sistema político en que se negocian y deciden “las grandes opciones nacionales”.

En otros términos, la pregunta por las dimensiones cultural y política de un estilo de desarrollo que tienda a reducir los actuales desequilibrios y aumentar la equidad social, debe –entre otros requisitos- considerar las concretas condiciones a partir de las cuales diversos conglomerados sociales han realizado el aprendizaje colectivo que puede permitirles acceder a roles más activos en la sociedad y, en definitiva, constituirse en actores sociales, cultural y políticamente estructurados y de reconocida legitimidad.

Un estilo de desarrollo endógeno y equitativo centrado en la satisfacción de las necesidades básicas de la población tiene obviamente, otras dimensiones esenciales. Una política de empleo tendiente al aumento de la producción y la productividad y el desarrollo de políticas sociales desde el Estado son, al menos, dos de esas dimensiones. Más aún, una de las razones de valorar las prácticas socioculturales presentes es las estrategias de sobrevivencia, es que ellas pueden contribuir a aumentar no sólo los márgenes de cobertura, sino la eficacia misma de una política de empleo y de servicios sociales. El reconocimiento del “circuito de acción propia” entendiendo como “circuito estructurador” de las capacidades propias de distintos grupos sociales podría, de este modo, potenciar los recursos nacionalmente disponibles para cualquier política de desarrollo.

De una somera revisión de la experiencia reciente no parece posible concluir que la orientaciones de acción presentes en las estrategias de sobrevivencia formulen una demanda democrática clara, entendida como reclamo de participación macro social y política. Por el contrario, las orientaciones predominantes en la cultura urbana de la sobrevivencia tienden más bien a expresar una conciencia de aislamiento, de exclusión, pese a ciertas formas disruptivas del orden social -más expresivas que instrumentales- acompañadas o no de un discurso político radical.

De lo antes dicho no se pretende concluir la imposibilidad del paso de uno a otro nivel de la participación social por parte de los sectores aquí analizados, ni tampoco transformar estas dificultades en un planteamiento normativo que valore unilateralmente las virtudes de la participación de base, del “desarrollo comunitario”. Al contrario, se trata de plantear esta dificultad como problema y su resolución como requisito de un orden democrático y de un nuevo estilo de desarrollo.

El haber puesto aquí un énfasis unilateral en “la acción autónoma y fragmentaria de las bases” no debe inducir a desconsiderar los problemas de la gestión local y la descentralización, del desarrollo regional y de la planificación participativa que son el reverso institucional (estatal, público) fáctica y analíticamente imprescindible, de un estilo de desarrollo que hace de la satisfacción de las necesidades básicas de la población su criterio ordenador. Esta perspectiva intenta recoger, además, una dimensión ética creciente y explícitamente presente en la emergente cultura política del desarrollo que enfrenta la actual crisis.

La hipótesis de la no reversión en plazos históricamente breves de las tendencias que han producido la actual situación de crisis, plantea no sólo un criterio de urgencia -que define la articulación entre estrategias de sobrevivencia, satisfacción de necesidades básicas y participación social- sino que determina la percepción de lo posible en las orientaciones de la acción colectiva.

Ello sugiere que la recuperación democrática en condiciones de crisis económica, se asocia más con el deseo de salir de dicha crisis que con el desarrollo de un proyecto futuro. Las estrategias defensivas reemplazan los proyectos. La confirmación de esta hipótesis significaría el primado del “sistema de conflictos económicos corporativos” por sobre las capacidades de regulación de la sociedad política. De ello resultarían dificultades suplementarias tanto para el establecimiento de un régimen político capaz de agregar demandas y resolver conflictos, como para la operacionalización de un estilo de desarrollo coherente y estable. La no regulación política del “sistema de conflictos económico-corporativos” podría configurar una cultura política de amenazas mutuas y rígidas identidades colectivas en que la democracia –en la mejor hipótesis- no fuera sino “la institucionalización de la incertidumbre”.

Junto a la reducción y debilitamiento de los sectores sociales (obreros industriales, capas medias ligadas al estado) tradicionalmente constituidos como actores en el sistema político, han aumentado los sectores no (o difícilmente) representables (cesantes, empleo informal). Siendo que “la masa urbana es la menos representable de las categorías sociales”, la actual crisis de representación concierne de manera importante a estos sectores que normalmente, podrían reforzar sus orientaciones de acción defensiva (“basismo”). Las actuales dimensiones de la marginalización urbana plantean un enorme desafío a la concertación democrática que requiere de un alto grado de legitimidad y representatividad.

La perspectiva de análisis aquí expuesta pretende explorar las potencialidades políticas del tejido de ONG en cuanto núcleos de energía social capaces de trascender el nivel corporativo de sus orientaciones de acción. Ello supone apartarse de toda visión reduccionista que hiciera de la acción no-gubernamental y de sus organizaciones un ámbito reservado a la acción “de los pobres, por los pobres y para los pobres”. La satisfacción de las necesidades sociales requiere de transformaciones históricas que suponen la participación de una diversidad de agentes sociales que no pueden ser reducidos a los pobres, ni –incluso- al mundo popular considerado restrictivamente. Dirigentes políticos, burocracia pública y privada, empresarios, dirigentes de asociaciones profesionales y otros grupos de capas medias, periodistas y comunicadores sociales, intelectualidad, iglesias y organizaciones estudiantiles son algunos de los agentes de cambio posible sin cuya consideración las dinámicas de transformación histórica no son imaginables.

La perspectiva mas adecuada de acción desde el ámbito de las ONG es aquella que –junto con responder a las necesidades sociales más urgentes- no se desvincula de la creación de capacidades sociales –es decir de poder- que permitan la concertación de acciones efectivas a nivel de conjunto de la sociedad y del sistema político y no sólo iniciativas centradas en la sobrevivencia a nivel comunitario. La creación y ejercicio de dichas capacidades es lo que entendemos por ciudadanía social.

Pero, estas nuevas prácticas perderían su sentido si se deja de considerar que construir democracia en el doble ámbito de lo institucional y de lo social aparece como el objetivo insoslayable de la acción de las ONG latinoamericanas. Ello implica –según hemos argumentado más arriba- superar el quiebre actual entre un “arriba” (poder, capital, conocimiento) principalmente institucional y un “abajo” de la exclusión social, básicamente centrado en la sobrevivencia. Asumir ambas dimensiones requiere dar cuenta de dos matrices de la acción democrática. Una, básicamente referida al “arriba”, pone el acento a nivel institucional –estado, sistema político- y sus agentes principales son los partidos. Otra, referida al “abajo”, enfatiza la acción social-participativa, las relaciones primarias, el ámbito comunitario. Quebrar la separación entre el “arriba” y el “abajo” supone, en consecuencia, articular ambas matrices de la acción democrática.

Lo anterior alude a un dominio en que la acción no gubernamental puede hacer contribuciones efectivas: el de la organización y participación populares. Ambito caracterizado en las palabras de M. Wolfe por el paso de la “participación autodefensiva” a la “participación conflictiva”, es decir aquella que no renuncia a la voluntad de producir transformadoras acciones de cambio estructural. Aquí el tema central

parece ser el de la articulación entre las organizaciones sociales de base (asociaciones vecinales, grupos juveniles y femeninos, centros culturales, etc.) y el nivel político, sea éste partidario o estatal. En condiciones de autoritarismo, la ausencia de mediadores entre uno y otro nivel ha sido manifiesta. Sólo la Iglesia Católica, en la mayor parte de los casos ha cumplido ese papel. Sin embargo, la recuperación democrática no ha producido destacables experiencias de articulación. Más bien –como hemos dicho antes- ella ha puesto de manifiesto la lógica corporativa y el ensimismamiento institucional de unos y otros. En esta materia, los centros y otras instituciones de apoyo –sobre todo aquellas de alcance nacional- no parecen hasta la fecha haber generado innovaciones significativas. Sin embargo, dicho aporte de los centros parece imprescindible para la articulación de lo que más arriba hemos llamado dos matrices de la cultura democrática.

II. MODERNIZACIÓN DE MODERNIZACIONES ¿Y TODO MODERNIDAD?

El momento de inflexión electoral más importante en el comportamiento de los chilenos durante los últimos años no ocurrió en la última elección presidencial en que Ricardo Lagos necesitó de una segunda vuelta para derrotar a su opositor de derecha, sino en las elecciones parlamentarias de diciembre de 1997, cuando la Concertación registró la mayor pérdida de votos desde 1989, con altos porcentajes de abstención y de votos nulos y blancos. Los analistas señalaron que no fue únicamente un voto de castigo al gobierno del Presidente Eduardo Frei y a su coalición, sino que más bien habría expresado un malestar ciudadano por las formas predominantes de la vida política desde el comienzo de la década de los noventa.

En efecto, los gobiernos de la Concertación estaban atrapados entre la institucionalidad parcialmente democrática de los acuerdos constitucionales pactados en 1989 y su temor a que formas amplias de participación ciudadana generaran unas demandas sociales que, partiendo de la significativa deuda social acumulada durante los años del régimen militar, alteraran los equilibrios macroeconómicos y comprometieran la gobernabilidad. El incremento de los conflictos sociales a partir de 1998 puso fin a la autocensura en la participación ciudadana y agravó los síntomas del malestar social, que se dirigía principalmente al gobierno y al sistema de partidos.

En un informe de 1998, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estudiaba “las paradojas de la modernización” que permitían comprender por qué el vertiginoso crecimiento económico de los diez años precedentes no se acompañaba de percepciones ciudadanas de bienestar, seguridad y pertenencia. “La brecha de la insatisfacción” mencionada por el entonces ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, caracterizaba la subjetividad del país.

La profunda crisis económica que afectó a Chile durante 1999 agravó la situación. Su impacto social objetivo (el desempleo alcanzó dos dígitos) y subjetivo (sentimientos de pérdida, resentimiento, miedo, crisis de identidad) fue demoledor.

Premonitoriamente, el citado informe del PNUD señalaba: “En tales situaciones de desencanto puede cristalizarse el populismo. Entonces la subjetividad busca su cauce al margen de las instituciones, en la identificación con algún líder capaz de dar nombre a los sentimientos y anhelos populares. El

“momento populista” condensa un malestar difuso que expresa esa `subjetividad vagabunda’ a la búsqueda de codificación”.

De entonces a la fecha, nada significativo ha contribuido a superar con éxito dos de las principales asignaturas que la transición chilena ha dejado pendientes: la legitimidad y calidad en el proceso de formación y toma de las decisiones estratégicas del país y el equilibrio de la ecuación entre consensos nacionales, desarrollo directivo y participación ciudadana.

Respecto al primer punto, el país carece de un marco institucional aceptado por todos los sectores. No hay reglas del juego compartidas que permitan dirimir controversias y conflictos, así como tomar decisiones con un efecto vinculante para todos. Los poderes fácticos y los enclaves autoritarios en el seno de las instituciones han puesto de manifiesto que las insuficiencias democráticas de la actual Constitución bloquean no sólo el desarrollo político del país –bajo el supuesto de que la democracia debe tener límites y ser protegida- sino que “jibarizan” tanto la autonomía como las capacidades directivas, públicas y privadas, de sus elites. El crecimiento económico no ha tenido correlato en la innovación institucional y en el desarrollo político.

En relación a la segunda asignatura pendiente –equilibrar la ecuación entre los consensos nacionales, el desarrollo directivo y la participación ciudadana-, la búsqueda permanente de dichos consensos ha sido el motor de la transición chilena. Esto ha tenido negativos efectos secundarios, como la ausencia de un verdadero debate público que sacara a la luz las tensiones y los problemas no previstos en el acuerdo pragmático que permitió la transición.

El uso del consenso significó en la práctica la parálisis directiva, el anquilosamiento de las elites políticas y empresariales, el temor y la condena de todo disenso, la opacidad en la gestión de los asuntos públicos y el dominio de la burocracia.

Uno de los efectos externos negativos de la transición ha sido el debilitamiento de las prácticas constitutivas de la democracia (participación, representación, transparencia) debido a una creciente separación entre la clase política y los ciudadanos. Se produjo una significativa expropiación de la soberanía popular a favor de las elites. Podría decirse que la clase política gobernaba sola al modo de una oligarquía de influencias. La estrecha relación de esta nueva oligarquía partidocrática con los poderes fácticos (convertida hoy en una floreciente industria) blindaba la separación de la ciudadanía.

Esta constelación de intereses monopolizaba lo “políticamente correcto”, descalificando cualquier manifestación ciudadana no encuadrada por la clase política. Todo disenso era entendido como una irresponsable impertinencia cívica.

Durante generaciones –y esta última no ha sido una excepción- los ciudadanos se han dado cuenta de que el acceso al Estado y a sus servicios no se hacía por el ejercicio de sus derechos, sino a través del sistema político, por medio de unos partidos de naturaleza clientelista y articulados en redes de cacicazgos electoralistas. Estas “máquinas partidarias” monopolizan las estructuras directivas de los partidos y las relaciones de los ciudadanos con el Estado.

El otro ámbito en el que los consensos todavía se encuentran en estado embrionario, está relacionado con una estrategia de desarrollo que enfoque, priorice y dé estabilidad a las decisiones de políticas públicas en el largo plazo. Estos asuntos han sido puestos de relieve por los sectores más lúcidos del empresariado nacional en diversas ocasiones, la última de las cuales ha sido en Octubre 2001 en la Agenda Pro Crecimiento preparada por la nueva directiva de SOFOFA. Sin embargo, ni la clase política ni la empresarial han sido capaces de plasmar esta opción, de ahí “la debilidad directiva” o “el vacío de liderazgo” que a menudo se crítica en el país.

El actual gobierno de Ricardo Lagos, el tercero de la Concertación, en el futuro será juzgado por su capacidad para afrontar un doble desafío: gestionar una nueva agenda estratégica para el país y renovar profundamente, en un sentido democrático y participativo, las instituciones públicas y las formas de hacer política –autoritarias primero, oligárquicas y opacas, después- con que han convivido los chilenos durante los últimos veinticinco años.

En continuidad con lo obrado por los precedentes gobiernos de la Concertación, el presidente Lagos impulsa un Proyecto de Reforma y Modernización del Estado que ha resuelto “consultar con el Senado para en conjunto definir la forma de proceder legislativamente en las modificaciones a las decenas de leyes que requerirán adecuaciones (...). La reforma busca optimizar la relación entre la gente y el Estado en todo lo que atañe a los servicios públicos en que las personas aparecen como usuarios y en la coordinación entre el sector público y el privado” (9).

No son bajas las posibilidades de que esta consulta al legislativo derive en lo mismo que tantas otras precedentemente en América Latina: un largo y, finalmente, infructuoso debate parlamentario. De

ocurrir así –y el calendario electoral y la coyuntura política hacen pensar que así ocurrirá efectivamente– sería una prueba más de la alta ineffectividad del “mercado político” y de sus elevados “costos de transacción”.

Cabe escuchar una vez más a Douglas North: “sí los individuos tienen teorías diferentes para explicar el mundo que los rodea, entonces sus decisiones “racionales” serán diferentes también (...). En el mundo de la racionalidad instrumental las instituciones no hacen falta; las ideas, ideologías, mitos, dogmas no importan y los mercados eficientes, tanto económicos como políticos, caracterizan a la sociedad (...). No se va a adelantar gran cosa en modelar esas formas de gobierno (las del Tercer Mundo) si no se toman en cuenta los límites de la opción o decisión racional y la importancia de las ideologías” (10).

¿Qué hacer ante lo que Alain Touraine llamó la “exacerbada autonomía del discurso ideológico”?, ¿cómo cerrar constructivamente la brecha entre carencias y problemas, por una parte, y soluciones y sentido, por otra?, ¿cómo hacer social y positivamente significativas la disidencia, la crítica y la polémica?, ¿cómo evitar que el miedo al disenso y al conflicto congelen las bondades del consenso entre los bloques de hielo del “pensamiento único” y lo “políticamente correcto”.

Modernizar el estado es, ante todo, un desafío político que tiene que ver con el proceso de formación, toma e implementación de las decisiones públicas. Dicho proceso manifiesta aún altos niveles de opacidad, de restricciones a la ciudadanía, de vulnerabilidad ante los poderes fácticos y de ineficiencia.

No estamos necesariamente en presencia de una crisis de sociedad. Mejor aún –más allá de los fenómenos de la delincuencia, la droga, la violencia intrafamiliar, el desempleo– aparece una realidad social rica y diversificada, cuyas prácticas son portadoras de valores de amplio y profundo arraigo: solidaridad, esfuerzo personal, responsabilidad. Nuestra verdadera crisis está en la incapacidad que tenemos para reconocer las bondades de esta sociedad emergente.

Nuestra verdadera crisis es una crisis de las elites por su incapacidad para cambiar de mirada, para abrirse y para transformarse. No es una crisis del sector público o del sector privado. Es una crisis de dirección, de dirigencia, de liderazgo (11).

El encapsulamiento decisional público genera dinámicas perversas que alternan discursos públicos maximalistas con negociaciones privadas que generan los acuerdos suma cero y los blandos consensos que han sido, en no pocos casos, el rostro más visible de las transiciones democráticas.

Si la reforma del Estado se bloquea, debilitando el conjunto del proceso modernizador, es crucial evitar la tentación de “fuga hacia arriba y adelante” (más discurso ideológico y mayor encapsulamiento directivo): en este juego, la democracia lleva las de perder todo. Muy por el contrario, el juego debe ser “hacia abajo y hacia el lado”.

“Hacia abajo” es decir hacia todos los usuarios/ciudadanos del estado y hacia todas las formas emergentes de acción y de participación que testimonian de una invisible vitalidad social y de una instalación de nuevos micro actores sociales propia de las mutaciones estructurales en curso.

Desde dicha constelación puede emerger una suerte de “nuevo ámbito público intermediador” entre la sociedad y el estado. Desde prácticas expresivas, reivindicativas o cívicas, este nuevo ámbito podría desarrollarse no sólo en la densidad de sus vínculos sino también en su articulación con la institucionalidad pública convencional haciéndole llegar “las racionalidades ocultas del comportamiento social” (A. Hirschman) que no dejarían de potenciar los valores y las prácticas democráticas.

Vinculado a los nuevos requerimientos de creación de valor en el sector público (12) y de cambio institucional (13), este “nuevo ámbito público intermediador” encarna los más urgentes desafíos de liderazgos públicos (14) y de nuevas formas de gestión política.

EXCURSO (2): Emociones Cívicas Confesables³

Tenemos necesidad de compartir y de poner palabras a esta difusa –pero, continuada y omnipresente– sensación de vagabundear entre erosionados sentidos y añejas inercias y rituales vaciados.

Hay veces en que se nos olvidan, incluso, la búsqueda y los deseos. Estridentes e innumerables voces nos repiten que es claro y accesible el camino de los ganadores: el dinero, el poder, la fama y dan ganas de declararse perdedor convicto y escoger el anonimato y la clandestinidad.

No nos sirve lo sabido. Se agota el sabor de antiguas fiestas, se nos caen los libros de las manos, los nuevos íconos virtuales corren vertiginosos sin disimular sus oraculares silencios, viejas fraternidades se vuelven baldías. Han sido confundidos códigos y tradiciones. Nadie conoce los nuevos preceptos pero, dura lex, se exige su cumplimiento: somos exigidos por leyes que desconocemos.

Vivimos en la patria del desconcierto. Samaritanas voces nos prescriben recetas de química y demás sucedáneos, paraísos artificiales que debieran curarnos de los muchos y mortales males de la vida no vivida.

Pocos son los que perseveran, los capaces de soportar tiempos largos con preguntas inmisericordemente sin respuesta. Pocos son los que conversan, los que dialogan sólo con el alma en ristre, pocos son los resistentes capaces de negarse a las malas artes del disimulo, a las tecnologías del simulacro.

Pocos son, ellos lo saben. Siempre piden no ser nombrados, pero no se esconden, se hacen reconocibles, son sencillos, cotidianos, siempre responden –su silencio es maestría– a los aprendices auténticos. Suelen también transitar por las escuelas, las iglesias, las empresas, los partidos: transitan por ellos, pero no les pertenecen, los iluminan a ratos, pero no congelan su nomadismo. Viven en el camino. Habitan distintos mundos. Son ciudadanos de la duda, patriotas de la esperanza.

Son “como un aire, un aura, un eros” (Abel Posse). Son nuestros imprescindibles amigos. Sólo de ellos aprendemos. Son nuestros maestros. Viven en la invicta patria de nuestro corazón.

³ ... efectivamente confesadas en diversas contingencias de palabra oral o escrita durante 2001 (S. Spoerer).

Hace algún tiempo supimos que éramos analfabetos: que sólo uno de cada cinco chilenos “tenía el nivel de lectura mínimo para funcionar en el mundo de hoy”. Ahora debemos saber que somos, además, analfabetos emocionales y cívicos. No sabemos vivir con otros, no sabemos ser felices, pobre es nuestra calidad de vida. No somos capaces de descifrar el cambiante y cada vez más abierto mundo en que vivimos. El paisaje interior de nuestras emociones nos es desconocido. Las enseñanzas de la moral del precepto no nos prepararon para el discernimiento.

No hemos aprendido a nombrar los desasosiegos y carencias de nuestro tiempo vivido, ni poner palabras a nuestra hambre de afectos, ni retratar nuestros páramos de fraternidad, nuestros desiertos de sentido. Basta para comprobarlo una revisión aleatoria de la prensa diaria que nos habla del “maltrato infantil”, de que uno de cada tres profesores tiene su “salud mental en grave riesgo”, o del stress, fobias, crisis de pánico y depresión dominical de los ejecutivos chilenos.

Entre los anonimatos de “la mano invisible” del mercado y los de “la Razón de Estado” deciden todo sobre nuestras vidas; nos queda el silencio, la fuga, “pasar piola”, “no estar ni ahí” o el estallido expresivo y su balance de violencias.

La situación parece grave, cierto; pero está lejos de ser desesperada. La sociedad no ha muerto. “Esta ahí”: aquí y ahora. Necesitó aprender a vivir en silencio, cultivó el perfil bajo como un arte mayor. Supo que no era prudente “sacar los cachitos al sol” en la vía pública. De la invisibilidad hizo estrategia de sobrevivencia.

Una urdimbre básica de afectos hilvana al país. Es cierto que una extensa e interconectada red de cloacas atraviesa, también, la ciudad y que no son sólo, o sobre todo, atemorizados lanzas juveniles, cazados por la fuerza pública –según muestra la televisión- los que circulan por ella.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 2% de la población mundial es psicópata (es decir, no distingue entre el bien o el mal que produce con sus acciones). La OMS no da cifras de cínicos (aquellos que sí distinguen, pero hacen del simulacro un arte de su pretendida inocencia: “no sé”, “no sabía”, “no me di cuenta”). Estadísticamente, en Chile habría 300.000 psicópatas. Y cínicos ¿cuántos?. Una y otra de esas graves enfermedades del alma no se curan persiguiendo “monstruos humanos” sino aprendiendo a vivir y convivir mejor. No hay mejor terapia que la calidad de la ciudadanía.

De estos y otros males todos estamos afectados. Perder el miedo de mirarse el alma es ya empezar a estar a salvo. A salvo de hacer daño a otros, a salvo de hacérselo a uno mismo, a salvo de dejárselo hacer. W. Reich escribió en “Escucha, hombrecito”, algo similar hace más de 50 años: “tengo miedo de ti, porque de nada huyes tanto como de ti mismo. Estás enfermo, muy enfermo. No es culpa tuya; pero es responsabilidad tuya liberarte de tu enfermedad”.

Nada muy diferente había escrito el místico Tomás de Kempis siglos antes: “¿dónde estás cuándo no estás contigo mismo? y ¿qué has ganado, tras haber discurrido por todas partes, si te has olvidado de ti?”.

Huida u olvido de si mismo: “la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir”, dijo Jung. Dinero, poder y fama son los ilusorios sucedáneos de esas perdidas vivencias verdaderas en que habitan la plenitud y el sentido.

Pero, “¿quién dijo que todo está perdido?” (Fito Paez). El país –por ejemplo- está pletórico de “Historias de Patos Buenos” (editadas por el Programa Territorios de Participación Cultural (División Organizaciones Sociales, M.S.G.G.) y Lom Ediciones).

Cercanos, cotidianos –y, sin embargo, a menudo, invisibles- los Patos Buenos de estas historias nos regalan gestos, actos y palabras que recibimos como abrazos, como bálsamo en la desgarrada piel de muchos sueños rotos, son como frágiles relámpagos para tanta noche del alma. Escrito así, suena dulzón, kitsch: inevitable signo de los tiempos.

Continuemos. ¿De quién, de qué, nos hablan estas historias?. Con excepción de la figura del Padre Hurtado, todos los personajes pertenecen al socialmente condenado submundo de los “perdedores”. Ninguno de estos Patos Buenos es famoso, ni rico, ni poderoso. Son “ciudadanos de a pié” pobres, discapacitados, estudiantes nocturnos, mineros, profesores, mujeres de población, jóvenes. No pertenecen a la restringida estirpe de los “ganadores”. Pero están lejos de vivirse derrotados: sencillos, dignos, auténticos, santos cívicos, sin adoradores, ni marketing ni santoral.

Las historias tejen, una hospitalaria urdimbre de humildes héroes con los que uno llega a soñar que se los encuentra en cualquier esquina. Suenan a “pasado de moda”, a lo menos “in” del mundo, estas historias que no cuentan milagros ni excepcionales hazañas. Son historias “piola”. Se atreven a

sostener, sin decirlo, que es bueno ser bueno, que decir bondadoso no es una manera elegante de decir “gil”.

Juntas, las historias se escuchan como una armoniosa coral: ni quejas virulentas, ni descalificaciones, ni chivos expiatorios, ni resentimientos. Lo que hay es abundancia de relatos nobles, positivos, “solucionadores”. Se palpa mucha resiliencia, autocuración, integridad.

En su entramado de familias, oficios y vecindades, los “Patos Buenos” son portadores de un poderoso sentido de arraigo social, de pertenencia, son parte de una tradición, tienen memoria social, son comunidad, constituyen un “nosotros”.

Sus acciones protegen a este “nosotros”, lo tejen, le dan densidad, lo cuidan, le dan seguridad. Abundan en las historias, los bomberos, scouts, dirigentes sociales, jefas de hogar. Todos son servidores. Son historias sin ego, llenas de corazón y sencillas en sus razones.

Cuando actúan lo hacen literalmente, por el bien de su comunidad. No hay ostentación ni grandelocuencia, son parte de sueños colectivos, difusos pero vivos. Cuando se les quiere agradecer o hacer un homenaje, un reconocimiento, dicen que no hicieron nada extraordinario, que sólo quisieron hacer lo mejor que pudieron las cosas que sentían que naturalmente tenían que hacer.

Vivificantes estas “Historias de Patos Buenos”. Deberían imprimirlas por millones y repartirlas en las escuelas, en los metros, en los mercados. Con su fraternidad, expresividad y sentido de vida se transforman para cualquiera que las lea en un artículo de primera necesidad. Amor fati. Dan ganas de hacerse pato bueno. Dan ganas de querer más. Dan ganas de amar nuestro tiempo. Dan ganas de amar nuestro país.

La fraternidad —esa virtud cívica, ciudadanía del amor— está de regreso en la plaza pública. De la “ética de la fraternidad” ha escrito Tomás Moulián que es una de las claves del socialismo del siglo XXI. Y Rodrigo Hinzpeter, Secretario General de Renovación Nacional ha postulado una “democracia fraterna”, sensible a los dolores de los chilenos y movilizadora de su solidaridad y convivencia. Los laboristas británicos promueven la “educación emocional” y sostienen que “conectarse con los sentimientos no es una opción fácil, pero estar desconectado de ellos no es inteligente”. La inteligencia emocional está de moda, cierto, pero no basta para descalificarla haciendo pasar nuestro escepticismo

por sabiduría. María Elena Wood en una de sus siempre sugerentes crónicas de “la vida por delante” llamó a subir “la emoción al poder”. Somos seguramente multitud los adherentes a su convocatoria. No se trata, cierto, de confundir lo expresivo con lo proposicional. Pero poner palabras a lo que nos hace sentir bien en la convivencia –fraternidad, amor- y querer orientarnos por ellas en la vida cívica, quizás termine haciendo que “la cosa pública” sea mejor. En todo caso, seguro que no queda peor de lo que está.

Ha sido dicho que ante un cambio paradigmático todos vuelven a cero. Todos, es decir, también las élites de los viejos paradigmas. Al interior de toda mutación histórica nada es duradero: “lo único permanente es el cambio”, “todo lo sólido se desvanece en el aire”, la volatilidad es el signo de los tiempos.

En tiempos de incertidumbre, de percepciones de zozobra, de difusos y extendidos pesimismo, predominan los reflejos autárquicos, las neurosis obsesivas, las manías controladoras, la gestión pánico. Cada quien se repliega sobre su propio ghetto, sobre sus cada vez más escasas “personas de confianza”, sobre sus escuálidas identidades y certezas. En tiempos como estos parecen remotas las palabras de F. Scott Fitzgerald en El Crack-up: “la prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo, y seguir conservando la capacidad de funcionar”.

El hundimiento histórico de las élites deriva de esta incapacidad de funcionar con “dos ideas opuestas”. Una, nacida de lo necesario de conservar del pasado (“toda innovación es tradición transformada” ha dicho H. Maturana) y otra, del reconocimiento de la legitimidad de lo que –aunque incomprendible- es inconteniblemente emergente. Toda resolución no catastrófica de una crisis implica creciente respeto a la diversidad.

La democracia es una forma de convivencia en que los seres humanos no son desechables por sus diferencias, limitaciones o anomalía alguna. No hay democracia sin ganas de vivir juntos, sin identidades construidas en común (la de ser chilenos, pese a todo, por ejemplo). Sin acogida, sin hospitalidad, sin empatía social es difícil imaginar reglas que permitan dirimir conflictos sociales.

Recordémoslo una vez más: “no existe el pensamiento equivocado, sólo existe el pensamiento parcial”. Jodie Foster lo dice a su manera en “El hombrecito Tate: “sólo si la gente que está a tu lado es diferente ... sabrás que estás en tu sitio”.

Nada erosiona tanto la confianza en si mismo como la incapacidad de convivir con la diferencia de otros. Es de esta pérdida de autoestima que nace la agresividad y los integrismos.

“Es necesario que cada una de las partes sea plenamente consciente del carácter particular de su perspectiva”, escribe H.G.Gadamer en “El problema de la conciencia histórica”. Y agrega: “la conciencia moderna está llamada a comprender las posibilidades de una multiplicidad de puntos de vista”. Esta es la clave de toda conciencia histórica que dé fundamento a la convivencia de cualquier “comunidad de destino” configurada en nación. Sólo la interpretación ética y las debidas consecuencias políticas extraídas del hecho que “posiciones opuestas forman un todo comprensible y coherente” pueden favorecer la configuración de nuevas y más satisfactorias formas de convivencia nacional. Niels Bohr lo dijo hace mucho. “lo contrario de una buena idea no es una mala idea. Lo contrario de una buena idea es otra buena idea”.

Sólo así es comprensible la ciudadanía. Y hacerla posible es el carisma de los grandes liderazgos nacionales, pues líder no es quien lleva a los suyos a la victoria, sino quien hace de los suyos una comunidad con sentido de pertenencia y de futuro, que respeta reglas y convive en el entusiasmo de la diferencia. ¿Cuáles son hoy estos liderazgos nacionales? ¿Cuáles son los liderazgos que nutren hoy el orgullo de ser chilenos o argentinos, mexicanos, venezolanos?.

Mientras pienso mis respuestas, me quedo con el ruego de un fantasmal Pessoa a Tabucchi, el autor de “Requiem”, casi al finalizar la novela: “please, dijo él, no me deje en manos de personas llenas de certezas, son gente terrible”.

Necesitamos aprender a permanecer en contacto con las verdades de la experiencia y perseverar en los intentos de apegarnos con sencillez a la integridad de las vivencias cotidianas (¿será algo parecido a ésto lo que maestros de distintos linajes llaman espiritualidad?).

Necesitamos aprender el arte de vivir sin ortopedias: a bailar esquivando las mutilaciones del alma.

Qué no mueran los afectos!.

Que despierte el corazón!

III. La Política ha muerto: ¡viva la política!

Abordar el tema de la política a partir de las transformaciones que la afectan como resultado de los procesos de globalización, la emergencia de nuevas identidades, las nuevas tecnologías y los avances en las comunicaciones, se ha convertido en práctica recurrente.

La interpretación que se hace de la transformación de la política como efecto de dichos procesos reconoce dos dinámicas principales, que para algunos resultan antagónicas y para otros complementarias.

Se trata, por un lado, de la profesionalización de la política y de su conversión en un tema para expertos, proceso mediante el cual se ve desprovista de su sentido público y de su carácter deliberativo y participativo, dejando paso al predominio de concepciones y prácticas ingenieriles y tecnocráticas.

Por otro lado, se reconoce un proceso de ampliación de los espacios de vida que se politizan, vale decir, que son construidos reflexivamente mediante un ejercicio activo de toma de decisiones tanto a nivel individual como colectivo. A esto lo han llamado algunos ciudadanía de la política, y otros surgimiento de la subpolítica.

Chile no es ajeno a estos procesos, aunque presenta especificidades originadas, fundamentalmente, en su historia reciente.

Quizá de los dos, el proceso más claro sea el primero, pues si bien no todos estarían de acuerdo en decir que la elite política chilena es una elite tecnocrática, parece fuera de discusión considerar que dicha elite progresivamente ha monopolizado la palabra –y, por tanto, el debate político- disminuyendo la participación real de sectores ajenos a ella en las deliberaciones, trayendo como consecuencia una merma en su sentido público. La política en Chile puede que no sea un tema de tecnócratas, pero sí es un tema de expertos que monopolizan la configuración de la agenda pública (“el club de los 200”).

Los espacios de toma de decisiones (sobre la sociedad) están copados y lo único que queda es dedicarse a eso donde los que tienen el poder no tienen nada que decir (no pueden decir nada): lo mío, lo nuestro, nuestra subjetividad.

Actualmente somos y nos creemos ciudadanos en más cosas, en más dimensiones de nuestra vida. Quizá todavía frente al Estado, pero en relación con más cosas: capacidad de elegir, participar, expresarnos, cuidarnos, alimentarnos, en todo aquello donde se juega nuestra felicidad. Y tal situación es esperanzadora con respecto al desarrollo de mayores capacidades ciudadanas: la ciudadanía se construye en su ejercicio. Y en un mundo cada vez más diverso y complejo es necesario que ese ejercicio se realice en los más variados contextos y situaciones con el fin de desarrollar una ciudadanía activa acorde a las nuevas necesidades y oportunidades.

En esta dirección, pareciera ser que nos encontramos en una etapa en que el modelo de ciudadanía y de acción colectiva considera varios componentes: (a) aquel en que sigue predominando el Estado como referente principal, se sigue encaminando a él las demandas, ya sea para exigirle directamente soluciones sobre materias que son de su responsabilidad o para que medie en la relación con otros actores, fundamentalmente los actores económicos; (b) emergen formas de acción en que el Estado ya no es mediador necesario y la ciudadanía organizada actúa de manera independiente frente a actores que la amenazan (como los económicos) y; (c) es aún muy incipiente y/o con poca visibilidad una acción directamente encaminada al auto-potenciamiento y no estrictamente defensiva de la ciudadanía (potenciamiento de las identidades comunitarias, potenciamiento de la acción ciudadana).

Por lo anterior, parece posible diferenciar entre una agenda política contingente y una agenda política de proyecto o, mejor, dos niveles dentro de la agenda. De esta forma puede decirse que, efectivamente, los temas de la agenda (contingente) han cambiado, tienen mucho dinamismo y variaciones. Los conflictos, exigencias y demandas se diversifican, mutan (porque la sociedad está viva). Pero en el caso del otro nivel de la agenda (proyecto), pareciera que no hay esa dinámica. El crecimiento sigue marcando la pauta, no el fortalecimiento de la sociedad civil.

La política chilena de los 90 habría jugado el juego de no ampliar los límites de lo posible, de no modificar las “percepciones de posibilidades” que tenía la gente. En esta perspectiva, los “candados” al o del sistema político y la baja libertad de expresión y alta concentración de medios son interpretables como dos manifestaciones de una misma lógica que podríamos calificar de conservadora, pues no se intenta modificar el “estado de cosas” o “espacio de posibilidades” existente, sino que se lo reafirma en su legalidad, a pesar del malestar ciudadano.

Veamos tres ejemplos. En primer lugar, dentro de la elite política se habla a menudo de la apatía y el desinterés que presenta la población, especialmente los jóvenes, respecto de esa actividad, constituyéndose en un lugar común del discurso con que políticos de distintas tendencias explican la disminución de la participación y el desgano cívico. Sin embargo, esos lugares comunes constituyen más bien “incompetencias hábiles” de la elite política para disimular su baja conexión y sintonía con las temáticas de la población y, más importante aún, con los procesos políticos emergentes y el déficit de comprensión de lo que está ocurriendo: se trata de una “manera virtuosa” de esconder la propia incapacidad.

En segundo lugar, se ha hablado del imperativo de supervivencia que cruza las prácticas y percepciones del mundo popular. Frente a él pueden desarrollarse diversos tipos de acción, entre los cuales podemos distinguir tres principales: uno de tipo conformista, uno de tipo transgresor y un tercero de tipo adaptativo. Diversas observaciones sugieren que el que prima es el tercero, lo que nos lleva a decir que predomina una lógica adaptativa en las prácticas desarrolladas por los actores populares.

Un tercer ejemplo lo encontramos en el mundo económico, sobre todo en el caso del empresariado. Se trata fundamentalmente de las altas condiciones de rentabilidad que son exigidas para el desarrollo de inversiones. Condiciones que en la mayoría de los casos superan las expectativas y exigencias de actores económicos de otras latitudes y que se originan principalmente en las inigualables condiciones de inversión (rentabilidad) otorgadas durante el régimen militar.

En síntesis, estos ejemplos ponen de manifiesto el desarrollo de formas de ver y de actuar, de principios de acción y percepción de las realidades en que operan los distintos actores mencionados que, en vez de predisponer para la ejecución de prácticas innovadoras, favorecen la mantención de las condiciones actuales o incluso el rescate de realidades pasadas: no se favorece el ejercicio de la ciudadanía más allá del voto, no se favorece el desarrollo de prácticas de (auto) potenciamiento de la acción ciudadana y, no se favorece la acción empresarial en contextos de alta y creciente competitividad.

El problema de la incapacidad de comprender es un problema de la elite (Crozier), y lo que genera, en un primer momento, es la incapacidad de hacer ofertas adecuadas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Pero el problema es mayor, pues se produce la imposibilidad (¿estructural?, ¿histórica?, ¿coyuntural?) de ejercer las propias capacidades y habilidades por parte de las “no-elites”, ya que

tampoco se generan los espacios institucionales adecuados para la expresión de las nuevas formas de acción ciudadana.

La precarización de la ciudadanía significa la destrucción del último soporte para la construcción de ordenamientos sociales, económicos y políticos más adecuados a la humanidad de los sujetos, y para hacerlo de la manera más igualitaria y democrática posible.

La política ejecutada o llevada a cabo por la Concertación (pero también y con mayor fuerza por la oposición de derecha) no ha estado bajo el principio o la intención de generar un fortalecimiento de la sociedad civil y de una democratización que incremente los niveles de participación de la gente, de la comunidad.

Muy por el contrario, ambos conglomerados políticos han actuado a la luz de una lógica que proporciona el “consenso implícito” entre opositores y partidarios de gobierno (en relación a las reglas del juego que se está jugando) a partir del cual se han privilegiado los intereses de los propios jugadores, es decir ambos bandos, los que sólo amplían la democracia a través de una expansión del mercado electoral, vale decir, a través de una ampliación de los espacios (de poder) que queden bajo el funcionamiento de la democracia competitiva en la que no tienen posibilidad otros contendores, cuestión que asegura las posibilidades de incorporar a más miembros de las máquinas electorales a las jerarquías estatales, aumentando el volumen y magnitud de aquellos que viven del Estado.

En este tipo de democratización, el ciudadano queda con sólo dos canales de participación: el voto y las peticiones, formas –ambas- que no modifican las características del juego, ya que sigue habiendo unos para gobernar y decidir, diagnosticar y solucionar y otros a los que sólo les queda esperar que quien creyeron tenía más capacidad de escucha, la tenga en la práctica, pues ellos mismos no tienen ‘derecho a los problemas’.

En una sociedad cuya elite política está alejada de la gente; donde existe una profunda brecha entre la vida cotidiana de las personas y los temas y discusiones de esa elite; donde los partidos políticos no dan cuenta de la totalidad de las demandas y necesidades de la población y, en particular, los partidos que tradicionalmente (históricamente) canalizaron las demandas y ‘conflictualidad’ social se encuentran abocados a las tareas de gobierno, la acción colectiva cobra un papel de gran importancia en la configuración de la realidad social y en la incorporación de nuevos temas a la discusión política(15).

A través de ella (acción colectiva) es posible alterar la dinámica de funcionamiento del sistema político y generar las posibilidades y condiciones mínimas para actualizar las instituciones y dispositivos de integración social.

Sin embargo, las condiciones del Chile actual no abren dichas posibilidades. La receptividad de la agenda política está volcada sobre temas que no son los de la sociedad civil y su fortalecimiento ni de mayores niveles de ciudadanía.

En este sentido, resulta crucial “desbloquear” el sistema político, cuestión que no significa sólo terminar con los enclaves autoritarios que bajan la calidad de la democracia, sino también generar políticas públicas que fortalezcan e incentiven la participación ciudadana y la asociatividad, en el entendido que sólo a través de un empoderamiento colectivo real es posible generar condiciones para un desarrollo humano pleno y autónomo.

Pero, ¿qué entendemos por “desbloquear” el sistema político? En principio, tres dimensiones fundamentales: i) modificaciones institucionales; ii) transformaciones de la agenda política y; iii) reorientación de las políticas públicas.

Respecto del primer punto es posible constatar elementos que hacen del sistema político chileno, para unos, una democracia incompleta, para otros una democracia tutelada y para otros, eufemísticamente, un sistema que consagra la estabilidad y el equilibrio. Entre estos elementos se cuentan disposiciones legales establecidas en la Constitución de 1980 que determinan la existencia de instituciones tales como el Tribunal Constitucional (sus atribuciones), el Consejo de Seguridad Nacional (atribuciones y composición) y los Senadores Designados. Tales reglas se ven resguardadas por un segundo tipo de disposiciones que establecen altos quórum para modificar leyes en ambas cámaras (como las orgánicas constitucionales, las interpretativas de la constitución y las normas relativas a su propia transformación) y el diseño de un sistema electoral que favorece una sobrerrepresentación de aquella minoría que actúa cautelando la mantención del ordenamiento institucional.

En segundo lugar, la agenda política de los gobiernos de la Concertación ha estado casi completamente copada por los temas de la transición democrática –durante los tres primeros años- y de la modernización, predominante en el resto del período.

La agenda política puede ser entendida como un dispositivo que permite un ordenamiento y jerarquización de los temas y problemas a enfrentar por un gobierno. En este sentido, podemos considerarla como un “programa” construido por los actores del sistema político que prioriza los temas y tiene una menor receptividad para temas nuevos. En la medida que los temas que han predominado estos últimos diez años –transición y modernización- han tenido como telón de fondo la gobernabilidad y, dentro de ella, la primera prioridad para los equilibrios macroeconómicos, la agenda política ha presentado una baja receptividad para temáticas emergentes como el fortalecimiento de la sociedad civil, la generación de condiciones de resguardo para las subjetividades e identidades sociales y la generación de una ciudadanía que trascienda la defensa de derechos tradicionales.

De hecho, el florecimiento de las “mesas de diálogo” –con todas las críticas que puedan hacerse- es interpretable como un signo de la incapacidad de dar cuenta de la creciente diversidad de puntos de vista que, sobre la totalidad de los temas, existe en la sociedad, pues ellas sólo existen para aquellos temas cuya legitimidad es reconocida por los actores del sistema político, en especial por el gobierno.

En tercer lugar, la reforma del Estado no puede limitarse a una cuestión de tamaño o de modernización de la gestión pública, ya que cambian sus funciones y el acceso de los individuos y grupos a su acción, cobrando importancia no sólo su cobertura, sino también su calidad.

Este aspecto es importante al considerar la presencia de fuertes culturas organizacionales y de servicio público entre los funcionarios del aparato estatal, las que han constituido una fuente de resistencia a las modernizaciones.

En las características de la institucionalidad pública a través de la cual el Estado se relaciona con los individuos se juega otra fuente del sentimiento moderno de desigualdad, ya que junto con complejizarse sus relaciones –o quizá precisamente por ello- se multiplican las prestaciones sociales condicionadas a los recursos del beneficiario potencial.

Esta situación tiene antecedentes concretos en América Latina en el proceso de “privatización general de la función pública” que sometió las actividades de servicio al criterio de rentabilidad e incluso llevó a su apropiación por parte de empresas. El objetivo era entonces, generar rentabilidad y no satisfacer necesidades sociales.

Otro tema fundamental en la discusión en torno a la institucionalidad pública tiene que ver con la tensión entre el imperativo de dar a los territorios cierta “atractividad” de acuerdo a los cánones de la nueva economía -para lo cual es necesario una acción coordinada entre el sector público y el privado- y conseguir respuestas para las exigencias “sociales” de los habitantes de dicho territorio, en el entendido que en la mayoría de los casos, no son convergentes.

La pregunta es cómo generar territorios atractivos o, desde otra visión, “clusters”, sin dejar de lado la iniciación y ejecución de políticas públicas cuya rentabilidad material y simbólica no necesariamente es reconocida como generando “atractividad”, como es por ejemplo el caso del rescate de identidades étnicas locales, políticas educativas pre-escolares y básicas y servicios de salud locales.

En la medida que la descentralización efectuada, a) por una parte, ha debilitado las organizaciones sociales, gremiales y políticas pero, por otra, ha fortalecido las redes sociales y culturales (pre-gremiales y pre-políticas que operan como expresión directa de ‘identidades múltiples’), b) se ha producido un debilitamiento del espacio público (estatal-institucional) y un fortalecimiento del espacio privado vinculado a la informalidad de los grupos y comunidades locales, lo que ha c) alterado los parámetros que encuadraron históricamente el accionar del ciudadano, generándose un proceso de desarrollo de formas y tipos emergentes de civilidad que llevaría a hablar del paso de una ciudadanía con encuadre estructurado a otra de carácter ‘refundacional’ en que la realidad emergente impone el desafío de diseñar y desarrollar una institucionalidad acorde con las nuevas demandas.

En este panorama de mayor informalidad en la participación social comunitaria, del ejercicio de la ciudadanía y de la actividad local en general y del surgimiento de nuevos problemas y necesidades, la acción pública debe enfrentarse con el creciente problema del déficit de información para la toma de decisiones y la generación de recursos de intervención.

Esta situación se ve reforzada en la medida que gran parte de los nuevos problemas y demandas y de los movimientos que en torno a ellos se generan tienen que ver con problemas de orden subjetivo, sobre los cuales el mundo político ha evidenciado una falta de conocimiento y, sobre todo, ha mantenido un casi completo silencio.

Hemos de entender que la política no debe ser monopolio ni de la “mano invisible”, ni de “la razón de Estado”. Aceptemos la invitación de H. M. Enzensberger: “compadezcamos a los políticos” (16), pero

no su patetismo: “acceder a la política es despedirse de la vida”. Existen múltiples nosotros emergentes. Ellos reinventan la política.

No es ilusorio creer que los mismos que, silenciados, han sido forzados a elegir “la salida” (Hirschman), puedan recuperar mañana “la voz” (idem) de insospechada manera. Que así sea.

EXCURSO (Final): notas para una ponencia al próximo Congreso...

1. Hacerse cargo del escuchar básico del discurso político: “insinceridad”, “mentira”, “engaño”, “manipulación”, “faltar a la verdad”, “sólo les interesan los votos”, “dicen una cosa por otra”. Necesidad de indagar en una dirección distinta de la del juicio moral (“los políticos no tienen principios”) o del juicio de insinceridad. Aceptar la hipótesis que “el problema” del discurso político no está en la existencia de un “doble discurso” (público y privado), sino en el “hablar” mismo, en el “lenguajear” del decir político. ¿Cuáles son las conversaciones que “tienen” al hombre político por el sólo hecho de actuar en ese dominio?.

Propongo investigar la naturaleza principalmente perlocutiva del discurso político. En esta dirección, la acumulación de poder (como objetivo propio de la política) que interesa al hablante político no es aquella que significa “capacidad de hacer cosas” sino capacidad de persuadir, convencer, intimidar, disuadir, inducir, sugerir, para que determinadas acciones sean realizadas por otros como resultado del discurso político (por el hecho de, como efecto de).

Lo propio del acto perlocutivo es no ser convencional. No puede ser juzgado en relación a reglas. No puede ser fundamentado. La eficacia del acto perlocutivo depende de su capacidad de ocultamiento, de no hacerse explícito. El hablar perlocutivo es el hablar en que un político “está lanzado” simplemente por hacer lo que hace. No es, necesariamente, un hablar “deliberado”, consciente. Es, más bien, “una comedia de equivocaciones”, un engañar desde el autoengaño. El prometer perlocutivo es necesariamente un prometer sin prometer: encantamiento y no compromiso. La figura retórica básica del discurso político es el eufemismo; decir sin decir, aludir, connotar, hacer que hable lo que no se dice.

En el “escuchar ciudadano” (el de los “independientes” y el de los “desencantados”), el discurso político aparece como “efectista”, “manipulador”, como malestar que no encuentra necesariamente fundamento. Allí germina la desconfianza. Y sus conductas típicas: alejarse (“la opción de la salida”, A. Hirschman), el “desencanto participativo” (abstencionismo electoral masivo), o la demanda autoritaria que cierra o disminuye los espacios de validez del decir perlocutivo y habla desde el monopolio de sentido. El discurso autoritario es, entonces, el de la “mentira institucional”, entendida como uso social del doble discurso y de las prácticas de

disimulo, distorsión, transgresión (ver aquí: “La Escuela de dictadores” de I. Silone y “El Pensamiento Cautivo” de C. Milosz).

2. Una segunda dirección que propongo para investigar la erosión de confianza en el ámbito político (la producción social de la desconfianza) es la que indaga en la ontología (tradicional) en que se basa “la disputa por la verdad”. La crítica del paradigma dualista tiene plena validez aquí. Los actores políticos alegan que el fundamento último de sus acciones y proposiciones es “tener (la) razón”, “ser objetivos”. Y puesto que lo real “es evidente” (las cosas son como son, es decir como yo las veo) quien no reconozca esa evidencia no puede sino “estar equivocado” o engañar. En uno u otro caso debo convencerlo (demostrarle que “tengo razón” o vencerlo (actuar a pesar suyo o contra él). La ausencia o debilidad del acuerdo social acerca de lo que constituye evidencia en política “enreda” las conversaciones en el punto de partida. La “realidad”, las “cosas” en política son discursos, conversaciones, interpretaciones de interpretaciones. El “hacer” de la política es, básicamente, “decir”. Y un decir que, al no poder apoyarse en evidencias, carece de la posibilidad de avanzar en la coordinación de acciones mediante compromisos. En política difícilmente “se habla de lo mismo”. De allí que el ámbito político se inunde de caracterizaciones y juicios (de “opiniones”) y de declaraciones carentes de autoridad.

Así nace otro vector de desconfianza: “los políticos viven en peleas entre ellos”, “nunca se ponen de acuerdo”; “se dividen a cada rato”, “son incapaces de gobernar”.

3. El círculo vicioso de “la disputa por la verdad” ancla la política en un presente impedido de ser “a causa de ...” (la lista de “culpables” y explicaciones recurrentes es variada según las particularidades de cada cultura nacional). El ser-como-son de las “cosas” en política hace “evidente” que lo son en cuanto presencia y no como posibilidad, virtualidad o proyecto. Cosificación de lo posible: “la realidad es así” (sobreentendiendo: “..qué le vamos a hacer”), “hay que ser realistas” (es decir, tener la lucidez de la desconfianza). La política niega así su posibilidad de ser un decir/hacer que inventa el futuro. Futuro inscrito en el “poder ser” que es el sentido mismo de la existencia humana (ser-en-el-mundo como haz de posibilidades). El ser de la política queda así atrapado en el estar lanzado de la ciega circularidad de su presencia. En estas condiciones, el tono efectivo de la política es el del escepticismo, del desengaño, de la resignación, de la acidia. Si no hay proyecto ni futuro no hay entusiasmo ni acciones válidas

(sólo disputas acerca de la verdad de lo presente). No cabe, entonces, “asumir responsabilidades”, hacerse cargo, tomarse en serio, tener confianza.

4. Si la realidad política es-como-es y no como “complejo de posibilidades”, entonces todo problema/quiebre no puede ser sino perversión de esa realidad y no revelador del futuro. Todo problema político es “culpa de alguien” (tal o cual dirigente o partido, del gobierno o de la oposición) que debe ser castigado (con derrotas electorales en democracia, con lo que sabemos en dictadura). El papel de la denuncia no es en política prevenir la repetición de acciones erróneas, sino producir efectos (de nuevo la función manipuladora del decir perlocutivo). De ahí la conversación chilena acerca de la frustración y del fracaso. Y la destreza consiguiente en generar explicaciones acerca de por qué eso es así. Y no en especular como podría ser de otro modo. Las discusiones políticas son conversaciones acerca de las distintas explicaciones que se dan a quiebres producidos en el pasado. Y cada quien construye identidad defendiendo su opinión, su “punto de vista”. A no ser que se produzca acuerdo en torno a alguna explicación universalmente aceptada: la “mala suerte”, “no fue culpa nuestra”, “nuestra idiosincracia”, las “victorias morales”. En uno u otro caso (encontrar culpable y/o explicación) la conversación política desincentiva el mirar los quiebres como anticipación de posibilidades, como reveladores de capacidades faltantes o como gatilladores de innovaciones (nuevas prácticas, diseño) que revolucionan el campo de lo posible. La desconfianza en política se arraiga en la aprendida desesperanza acerca de las capacidades de acción e innovación de quienes actúan en su ámbito.
5. La erosión de confianza en política está también conectada con su poca capacidad de producir resultados: “los políticos no trabajan”; “hablan y hablan pero no hacen nada”; “prometen y no cumplen”; “lo único que saben es tener ambiciones personales”; “sólo están interesados en ganar elecciones”. Observar aquí la especificidad de la incompetencia comunicativa en política. Ella no es entendida como pobreza del escuchar, sino como incapacidad de “hacer pasar el mensaje”: “lo que hacemos lo hacemos bien, pero lo explicamos mal”, “no nos entienden”, “no nos quieren entender para justificar sus ataques”, “los medios de comunicación están en contra nuestra”.

La especificidad de los resultados en política es producir coordinación de acciones socialmente significativas, seducir, elaborar y hacer practicar reglas del juego universalmente aceptadas,

hacer posible una convivencia: estas son las “cosas” de la política. Es en relación a ellas que se miden las promesas y su satisfacción.

Esta dimensión de la crisis de confianza en la política permanece, sin embargo, como punto ciego ante las nuevas preocupaciones por la “modernización” política. Esta tiene que ver más con la ontología de las “cosas” (técnicas, aparatos) y el mejoramiento de la “información” para el proceso de toma de decisiones que con el desarrollo de habilidades directivas, comunicativas (escuchar, interpretar, seducir) y destrezas operativas. Este sesgo de la modernización política parece entenderse como “puesta al día” según la concepción tradicional de las management sciences. El marketing político (saber vender candidatos) va en la dirección de hacer del sistema político un ámbito de espectáculo (que refuerza la desconfianza expresada en abstencionismo electoral), mientras el estado (la administración) monopoliza la eficiencia (privatización, menos estado) y los criterios de autoridad basados en su propia Legalidad (“para el pueblo: la ley; para los amigos: todo”).

NOTAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Según datos del último “Latinobarómetro”, en la región sólo un 48% de la población apoya la democracia, y a un 50% no le importaría que los militares llegaran al poder. Un 59% sostiene que el crecimiento económico es lo más importante contra sólo un 20% que lo sostiene de la democracia. Con sólo un 45% de apoyo a la democracia, Chile se encuentra bajo el promedio regional, lejos de Uruguay (79%), Costa Rica (71%), Perú (62%) y Argentina (58%). (El Mercurio, 3 de Agosto 2001).
2. Para las elecciones legislativas de diciembre 2001, sobre un total de 138 asientos disponibles, se presentan a la reelección 119 parlamentarios actualmente en ejercicio. La pertenencia partidaria no discrimina en este comportamiento. Lo central parece ser mantener la pertenencia a este reducido club político. Ver “Un parlamento autoreproductivo” y “¿Hay tiraje en la chimenea?”, La Tercera 29 de julio 2001.
3. René Cortázar, ex-ministro del trabajo de Patricio Aylwin y ex-Director del Canal Nacional de Televisión. Director de Empresas. La Tercera, 29 de julio 2001.
4. ¿Cómo transformar al Estado?. FCE, 1989.
5. Pep Subirós, El País, Madrid, 25 de Febrero de 1997, reseñando el libro de Susan J. Tolchin, The angry american. How voter rage is changing the nation.
6. El Mercurio 24 de Junio 1995.
7. El Mercurio 20 Noviembre 1990.
8. Desarrollamos en lo que sigue, algunas ideas previamente expuestas en “La nueva agenda chilena”, Política Exterior N° 74, Madrid, Abril 2000.
9. Alvaro García, Ministro Secretario General de la Presidencia. El Mercurio 25 de Julio 2001.
10. ¿qué queremos decir cuando hablamos de Racionalidad?. Estudios Públicos, 53 (Verano 1994). Originalmente en Public Choice 77 (1993). N° 1.
11. Michel Crozier, La crisis de la Inteligencia. MAP, Madrid, 1996.
12. Mark H. Moore, Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Paidós, 1998.
13. Douglass North, Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. FCE, 1995.
14. Ronald A; Heifetz, Liderazgo sin respuestas fáciles, Paidós, 1997.
15. Manuel A. Garretón, La Sociedad en que Vivi(re)mos. Lom editores, Santiago 2000.
16. Zig-Zag, Anagrama, 1999.